



NUE 304- A- 2019 (AC)

**contra Dirección General de Centros Penales (DGCP)
Resolución Definitiva**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta y un minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinte.

Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] en adelante la apelante, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), en la que denegó la información consistente en: "los documentos sobre el proceso de contratación de suministro de alimentación para todos los Centros Penales de El Salvador", en específico, los siguientes documentos: 1) Bases de licitación; 2) Términos de referencia; 3) Prórrogas, si las hubiere; 4) Montos de las Prórrogas; 5) Montos del contrato original; 6) ofertas recibidas; 7) Plan de compras de Centros Penales para el 2019; 8) Presupuesto de Centros Penales y cuánto se ha ejecutado a la fecha".

Los argumentos brindados por la oficial de información -según consta en el expediente administrativo a fs. 12, para denegar la información contenida en los numerales del 1 al 6, es que lo resuelto por la Unidad Secundaria de Adquisiciones y Contrataciones, en la que manifestó que desde el mes de octubre de 2019, esa información está clasificada como reservada, según la declaratoria de reserva 03-2019; por otro lado, respecto a la información señalada en el numeral 7, dicha unidad entregó la información, sin hacer referencia respecto a la petición establecida en el numeral 8.

El Instituto admitió la apelación del caso y designó al Comisionado **José Alirio Cornejo Najarro**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Para garantizar el derecho de defensa y audiencia del ente obligado, se le corrió traslado para que



presentará sus argumentos de justificación conforme al art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

En el informe justificativo, rendido por la apoderada de la DGCP, realizó un relato de lo actuado por la oficial de información de dicha institución, así como de lo requerido por la solicitante, haciendo mención de los arts. 9, 10, 25 y 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), referente a la finalidad de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, la designación de un jefe de la UACI, la capacidad para contratar y la prórroga de los contratos de suministro y servicios respectivamente.

Asimismo, alegó que: “En relación a la Bases de Licitación para el suministro de la alimentación para las personas privadas de libertad, éstas se han publicado en la página web COMPRASAL, en un proceso de licitación abierta, para que todo aquel que esté interesado pueda participar, debiendo considerar aspectos como: la capacidad, calidad y cantidad de los requisitos solicitados por la DGCP, para brindar el servicio de alimentación para las personas privadas de libertad, los cuales posteriormente deberán ser evaluados y calificados por la Comisión evaluadora y así cumplir con los requisitos legales que establece el art. 10 de la LACAP [...]”. Asimismo, se ratificó lo expresado por la oficial de información de la DGCP, respecto a que se cuenta con una declaratoria de reserva (Reserva 03-2019, de fecha 03/10/2019) que abarca lo requerido del punto 1 al 7.

En relación al numeral 8 sobre los presupuestos relativos a Centros Penales y cuánto se ha ejecutado a la fecha, se manifestó que la referida información se proporcionó por medio del memorando DGCP-USEFI-608/2019, CÓDIGO: OIR-01MEMOS-OIR, de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrita por la jefa USEFI de esa DGCP.

En la etapa de audiencia oral, en los alegatos iniciales la parte apelante manifestó que a la información objeto de controversia no le aplican las causales de reserva señaladas conforme a la LAIP. Que el art. 54 de la LACAP señala que la información puede ser reservada solo al momento de la oferta, pero en este caso no aplica porque el proceso de licitación ha finalizado. Que el fundamento legal de la declaratoria de reserva de este caso ha sido de los literales g) y h) del art 19 de la LAIP, pero no se está solicitando información de

un proceso activo, siendo de su conocimiento que la licitación ya ha sido finalizada y adjudicada. Que es de interés público el tipo de contrato adquirido por la DGCP y el proceso que se realizó para adjudicar un servicio que beneficia a una población reclusa de casi 40 mil personas, y siendo recursos estatales se requiere transparencia de los mismos.

Asimismo, expresó que la licitación era pública, por lo cual las bases de licitación también deben ser de conocimiento público. Que, cuando se solicitó la información en diciembre de 2019, según los registros en ese momento no se encontraba en el índice de información reservada, misma que fue actualizada hasta el mes de diciembre de 2019, y presuntamente la declaratoria de reserva se emitió el mes de octubre de 2019. Que, también se pregunta, si de conformidad a los arts. 22 y 23 de la LAIP, la información del índice de reserva se remitió oportunamente a este Instituto. Que, la publicidad de la información requerida no es una amenaza, sino una premisa para la transparencia.

Por su parte la apoderada del ente obligado, manifestó que no obstante alegarse el incidente del índice de reserva, lo cierto es que la declaratoria de reserva se le dio a conocer oportunamente a la ciudadana solicitante. Además, que se ha proporcionado el presupuesto ejecutado 2019, según lo solicitado. Aunado a lo anterior, considera que la solicitud de información no fue dirigida a donde correspondía, porque la LACAP señala donde se lleva todo este expediente de las licitaciones, es decir en la UACI. Además, afirma que a dicha licitación cualquier persona puede tener acceso, que la información al respecto se sube a la página de COMPRASAL y para el caso el expediente correspondiente se lleva en el Ministerio por el Departamento de la DACI, conforme a lo establecido por ley. Que la DGCP no está ocultando información, pero no es la institución obligada o facultada para dar o brindar esa información, siendo pertinente que la solicitud de información se realice al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En sus alegatos finales, la parte apelante manifestó que hace énfasis que la declaratoria de reserva fue subida al índice posterior a la petición de información, lo cual consta en el historial del sitio de transparencia. Asimismo, manifiesta su inconformidad con la información anexa a la resolución de la oficial de información, pues para empezar la misma no le fue entregada oportunamente, y al obtener su contenido, se advierte que la misma es insuficiente no hay un desglose del uso de dicho presupuesto. Por otra parte, manifiesta que



como ciudadana no tiene obligación de conocer la unidad generadora de información, le corresponde a la unidad de acceso a la información canalizar la solicitud de información, en este caso se dirigió a la DGCP porque es información sobre los diferentes centros penales y quien mejor que ellos para custodiar tal información. Que sobre la página de COMPRASAL, le gustaria tener la referencia de cuándo se publicaron esas bases de licitación, porque las mismas no permanecen en largos periodos de tiempo en dicho portal. Aunado a ello, si la información requerida está publicada en un portal web, no se ha logrado aclarar por el ente obligado, el motivo de una declaratoria de reserva de información.

En los alegatos finales, la representante del ente obligado expuso en lo medular que la ley ya establece quien lleva el expediente de las licitaciones. Que el tema de las actualizaciones del índice de información reservada es responsabilidad de la oficial de información. Asimismo, aclaró que no se solicitó el desglose de la ejecución del presupuesto, que se ha entregado según lo requerido. Que recomienda a la apelante que se aboque al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública porque es información que le corresponde resguardar a esa institución, que la DGCP es una dependencia de tal Ministerio. Que, si bien no se redireccionó oportunamente, en esa audiencia oral se le invitó hacer su solicitud de información al referido Ministerio.

A preguntas aclaratorias realizadas por el Pleno de Comisionadas y Comisionados de este Instituto, la apoderada del ente obligado manifestó que la adjudicación de dicha licitación se hace anualmente y hay posibilidad de una prórroga, el cual es un proceso de la DACI. La información de la licitación se hace pública en la página de COMPRASAL; sin embargo, la misma ha sido reservada por la Jefa de Compras y como institución está en derecho de reservar la información que así se considere. Que la información no está en poder de la Dirección General de Centros Penales, todo el expediente desde las bases de licitación está en la DACI. Que no “podría decir” si esa información se solicitó a la DACI, únicamente puede manifestar que el expediente lo tienen en esa unidad. Que, en la resolución de la oficial de información, se expresó y proporcionó la información que se tiene en la DGCP. Que la reserva se hizo del plan de compras, pero más allá de esa declaratoria de reserva de información reitera que es información que tiene la DACI. Que sabe que el proceso de licitación de 2019 ya finalizó. Que no sabe cuántos oferentes hubo en la última licitación

porque es información que lleva la DACI. Que los mecanismos de comunicación con las diferentes entidades son por medio de la Subdirección Administrativa o por la Unidad de Compras de la DGCP. Que no puede revocar una declaratoria de reserva porque no es la funcionaria competente para ello.

Análisis del caso

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información requerida, valorado la naturaleza de la misma, y los principios rectores de máxima publicidad, disponibilidad, integridad y rendición de cuentas. En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); **(II)** análisis del caso entorno a la valoración de la prueba aportada y examen sobre el cumplimiento de requisitos de la declaratoria de reserva; y, **(III)** Breves consideraciones respecto a la competencia para entregar información pública que se encuentre en poder del ente obligado.

I. En reiteradas líneas resolutivas este Instituto ha señalado que el Acceso a la Información Pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. Es así, que el **DAIP** comprende la facultad de **buscar, recibir y difundir** datos, ideas o **informaciones** de toda índole, pública o privada, que **tengan interés público**. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, porque **su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.**

En concordancia a lo anterior, y por principio de legalidad, la administración pública, como regla general, está obligada a proporcionar la información contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, **que consten en cualquier medio**, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente y fecha de elaboración; de conformidad a lo establecido en los art. 6 letra "c", 7 y 10 de la LAIP.



Por otra parte, la LAIP establece una clasificación tripartita de la información: pública (oficiosa o no), reservada y confidencial. La **información oficiosa** es aquella que los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, con el correlativo deber de divulgarla y actualizarla en los términos que expida este Instituto. Mientras que la **información reservada** es aquella que, por razones expresas en la Ley, debe mantenerse con ese carácter, durante un plazo establecido, debiendo los entes obligados emitir una resolución motivada en la que se acredite que los presupuestos fácticos relacionados con esa información encajan en el supuesto de hecho establecido en la norma, de conformidad con los requisitos de fondo y de forma establecidos en el Art. 21 de la LAIP. Por su parte, la **información confidencial**, es aquella que se refiere a la privacidad de la persona, los datos personales, los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal.

En virtud del objeto de controversia del presente caso, es pertinente establecer que el funcionario público encargado de clasificar la información como reservada debe tomar en cuenta la **legalidad, temporalidad y razonabilidad** del porqué se decide excluir temporalmente la información al acceso público; una vez ha concluido el plazo de reserva, la información vuelve a estar a disposición para su divulgación y por lo tanto puede ser solicitada por cualquier persona en virtud del DAIP. Es importante señalar que las causales establecidas en el Art. 19 de la LAIP son taxativas y no pueden invocarse otras que no estén señaladas en la ley.

II. En ese sentido, corresponde al ente obligado demostrar de manera fehaciente la aplicación de cualquiera de las causas de restricción al derecho de acceso a la información y establecer categóricamente el análisis realizado respecto a la legalidad, temporalidad y razonabilidad, considerando la **subsistencia de un riesgo real ante la revelación de la información que se trata de restringir, a efecto de proteger el o los bienes jurídicos determinados.**

A. En ese contexto, la negativa de entregar la información requerida por la apelante, tuvo como principal argumento la declaratoria de reserva 3-2019, según consta en resolución con referencia UAIP/OIR 0405/2019, de fecha 19 de diciembre de 2019 (fs. 12 del expediente administrativo). Asimismo, respecto a la solicitud del “Presupuesto de Centros Penales y

cuánto se ha ejecutado a la fecha”, se relaciona la entrega de memorándum que corre agregado a fs. 13 del expediente administrativo; sin embargo, no tiene constancia de recibida por parte de la apelante.

No obstante, en audiencia oral se modificó el argumento principal del ente obligado -ya relacionado en la resolución de la oficial de información-, en virtud del principio de congruencia, es pertinente proceder a verificar la validez de dicha declaratoria de reserva.

En atención a lo anterior, corresponde hacer la valoración probatoria, de acuerdo a los elementos de la sana crítica (lógica, experiencia y la psicología); es así, que se admitió la prueba documental ofrecida por el ente obligado, consistente en: a) Copia certificada de declaratoria de reserva de fecha 03/10/2019, sobre procesos de licitación para la selección de proveedor o proveedores de servicios de alimentación para los diferentes Centros Penitenciarios; y, b) Copia certificada de memorando DGCP-USEFI-608/2019, CÓDIGO: OIR-01MEMOS-OIR, de fecha 16/12/2019, suscrita por la jefa USEFI de la DGCP. Asimismo, se analizará el contenido del expediente administrativo con referencia DGCP-2019-0405.

B. Entonces, para el caso en comento, el ente obligado denegó la información alegando que la misma se encuentra reservada con base en el art. 19 letra “g” y “h” de la LAIP, según la declaratoria de reserva del 3 de septiembre del año recién pasado. En tal sentido, los referidos literales señalan que es información reservada: “g) La que comprometiére las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso; y, h) La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.

Al respecto es importante, retomar que en la causal del literal g), esta se aplica a procedimientos judiciales o administrativos **que están activos y no han finalizado**, por lo que **una vez finalicen estos procesos y haya una decisión definitiva la información de los mismos debería ser pública**; en consecuencia, se debe verificar tal situación en el presente caso, a fin de verificar la validez de la declaración de reserva realizada ante tal causal.

En tanto, lo que corresponde a la causal establecida en el literal h), se debe apuntar que la misma se refiere a cualquier información que genere **una ventaja que no es correcta**,



ni legal, a favor de una persona, con lo cual se afecta a otra; para lo cual debe quedar expresamente relacionada la norma infringida y la persona o personas afectadas con su divulgación, no siendo válido bajo ningún concepto un análisis especulativo.

Expuesto lo anterior, corresponde analizar la información solicitada por la apelante a la luz de la LAIP y verificar el argumento de la **DGCP** respecto a la clasificación de la información de conformidad a las causales alegadas, siendo el cuadro fáctico de información concerniente a *documentos sobre el proceso de contratación de suministro de alimentación para todos los Centros Penales de El Salvador* correspondiente al año 2019, el cual ya está finalizado, según lo manifestado por la representación del ente obligado.

C. En virtud de lo anterior es válido realizar algunas acotaciones respecto de la declaratoria de reserva emitida por la **DGCP**, respecto a la concurrencia de sus requisitos: **(a)** legalidad, **(b)** razonabilidad y **(c)** temporalidad, y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

(a) Legalidad. La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

(b) Razonabilidad. Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública como reservada. En esencia, no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

(c) Temporalidad. Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el arts. 20 de la LAIP y 31 letra “f” de la RELAIP; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las personas, al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.

Entonces, es pertinente verificar el cumplimiento de los tres requisitos. En cuanto al de legalidad el ente obligado ha realizado un ejercicio de adecuación de las causales de las letras g y h del Art. 19 de la LAIP, a la información objeto de controversia. Es importante acotar que dicha adecuación no es automática y mucho menos antojadiza, máxime que lo que se está limitando es un derecho de índole constitucional; por ello, dicha actividad debe sujetarse a la lógica y a la razonabilidad; lo cual, en este caso, no se observa de primera mano, pues la información objeto de controversia es pública oficiosa de acuerdo al art. 10 letra 19 de la LAIP.

En este sentido, se debe analizar de manera prolija la razonabilidad de la reserva; es decir, si la limitación temporal de divulgación de información pública oficiosa, lo cual provoca sin duda un daño a la DAIP de la población, es menor al daño que se podría causar a los bienes jurídicos que se pretenden salvaguardar con la reserva, con miras de garantizar el bien común de la población; con ello, se busca evitar la simple transcripción de lo establecido en la ley, sin hacer ningún ejercicio de análisis y adecuación de la norma al hecho en concreto.

En este caso, al analizar la prueba se observa que la declaratoria de reserva carece de un fundamento específico en hechos concretos y lógicos que la divulgación de la información, cause un menoscabo en los bienes jurídicos que buscan proteger las causales legales señaladas, conforme al art. 21 de la LAIP y 38 de su Reglamento.

En el caso de la causal que indica que la información puede generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero, este Instituto considera que esta causal tal como se mencionó anteriormente, puede aplicar en etapas específicas de los procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios públicos, por ejemplo, no se podría revelar las ofertas de los competidores cuando aún se encuentren en la etapa de recepción de las mismas. En el presente caso, el ente obligado manifestó que el proceso a finalizado; por tanto, por lógica no existe un fundamento para limitar la información bajo esta causal, por lo que invalida.

Por otro lado, respecto al peligro o riesgo de una estrategia o funciones estatales, tampoco se indicó de manera razonable cuál estrategia o función que se vería en peligro o en



riesgo con la divulgación de la información, pues al contrario el limitar el acceso a la información pone en peligro una función de todo ente obligado, que es la divulgación de información conforme al art. 7 de la LAIP. Por ende, no es válida la reserva de información.

Entonces, al verificar que no se ha cumplido con los requisitos anteriores, resulta innecesario e inoficioso verificar el requisito de **temporalidad**, al ser evidente que lo pertinente es revocar la declaratoria de reserva número 03-2019, de fecha 3 de octubre de 2019; y por ende, la información requerida en el presente caso, por no lograrse tener por establecido el fundamento por el cual se limitó su acceso.

Al respecto, el marco jurídico interamericano ha establecido que el Derecho de Acceso a la Información Pública debe implementarse bajo los principios de máxima divulgación y buena fe; de lo cual se desprende que “...*cualquier restricción debe ser motivada e implica una carga para el Estado para probar las razones que motivan el rechazo...*”¹ (itálica y negritas propias).

III. No habiéndose establecido en legal forma una restricción a la divulgación de la documentación requerida en este procedimiento, el pleno de este Instituto considera hacer algunas acotaciones respecto a la competencia del ente obligado para hacer entrega de la misma.

Al tenor de lo anterior, es pertinente establecer que de conformidad a lo establecido en el art. 4 a) de la LAIP, existe obligación de entregar la información que está en poder de los entes obligados, al ser de naturaleza pública y de difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Entonces, habiéndose establecido que la información requerida en el presente caso está en poder de la DGCP -al no haberse probado lo contrario- por ministerio de ley dicha institución debe proporcionar la misma a la ciudadana apelante.

Aunado a lo anterior, no es atendible la postura tomada por el ente obligado en la realización de audiencia oral del presente caso, en cuanto a “redireccionar” la petición de la ciudadana requirente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por encontrarse presuntamente en el Departamento de Adquisiciones y adquisiciones institucionales, el

¹ Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos: Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de diciembre de 2019; pág. 91

expediente de toda la documentación solicitada, sin perjuicio que tal información también esté en poder de la DGCP, según lo ordenado en la Declaratoria de reserva 3-2019.

Es importante mencionar que, de acuerdo al organigrama actualizado en mayo 2019 (ubicándonos al tiempo de la solicitud), de acuerdo al portal de transparencia de la DGCP, esta tenía su propia unidad de adquisiciones y contrataciones (la cual la posee a la fecha), por lo que resulta extraño que mencionan que esa información no la posean, pues se trata de una contratación relacionada a los centros penales, es así que ese argumento no es válido.

Asimismo, debe considerarse que la información requerida por la apelante es en relación a un proceso de licitación ya finalizado, correspondiente al año 2019, el cual de conformidad con el art. 10 número 19 de la LAIP es información pública oficiosa. Puesto que dicha disposición establece la obligación de cada institución de poner a disposición del público, divulgar y actualizar —de manera oficiosa— la información relacionada con las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme, específicamente —aunque sin pretensiones de taxatividad— lo relacionado con el objeto, monto, nombre y características de la contraparte, plazos de cumplimiento y ejecución de los mismos, la forma en que se contrató, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.

En consecuencia, no habiéndose comprobado que los datos solicitados encajan dentro de las causales de reserva establecidas en el art. 19 de la LAIP, es pertinente ordenar la entrega de la información que tiene en su poder la DGCP respecto a los documentos sobre el proceso de contratación de suministro de alimentación para todos los Centros Penales de El Salvador, específicamente: 1) Bases de licitación; 2) Términos de referencia; 3) Prórrogas, si las hubiere; 4) Montos de las Prórrogas; 5) Montos del contrato original; 6) ofertas recibidas; 7) Plan de compras de Centros Penales para el 2019; 8) Presupuesto de Centros Penales y cuánto se ha ejecutado a la fecha -28 de noviembre de 2019-. Asimismo, si en dicha información se encuentran datos personales como direcciones de correo electrónico personal, número de cuentas de terceros que no son servidores públicos, número telefónico u otra información analógica, deberá realizarse la respectiva versión pública de conformidad con el Art. 30 de la LAIP.



3. Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d) y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) Revocar el contenido de la resolución impugnada, la cual fue emitida por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)** con referencia UAIP/OIR 0405/2019, de fecha 19 de diciembre de 2019.

b) Desclasificar la información contenido en la Declaratoria de Reserva 3-2019, de fecha 03 de octubre de 2019.

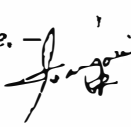

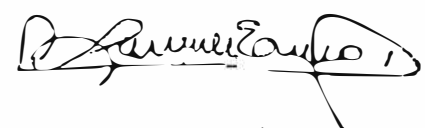
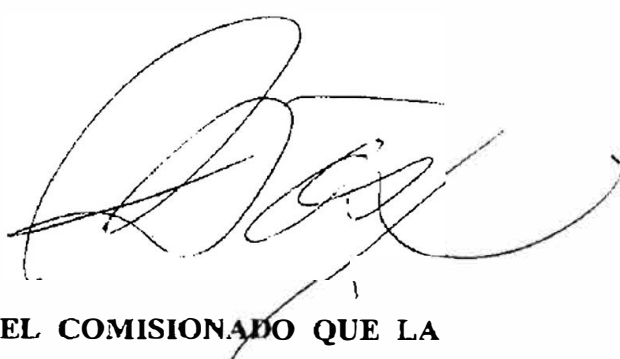
c) Ordenar a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), por medio de su titular, dentro del plazo de **diez días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a [REDACTED] la información requerida, consistente en: “los documentos sobre el proceso de contratación de suministro de alimentación para todos los Centros Penales de El Salvador. Los documentos específicos que requiero son los siguientes: 1) Bases de licitación; 2) Términos de referencia; 3) Prórrogas, si las hubiere; 4) Montos de las prórrogas; 5) Montos del contrato original; 6) ofertas recibidas; 7) Plan de compras de centros penales para el 2019; 8) Presupuesto de centros penales y cuánto se ha ejecutado a la fecha [28 de noviembre de 2019]”. Asimismo, si en dicha información se encuentran datos personales como direcciones de correo electrónico personal, número de cuentas de terceros que no son servidores públicos, número telefónico u otra información analógica, deberá realizarse la respectiva versión pública de conformidad con el art. 30 de la LAIP.

c) Ordenar a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste la documentación entregada a la ciudadana apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

e) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

g) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.    

PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN

SD/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diez días del mes de agosto de dos mil veinte.


NOTIFICADOR
IAIP



